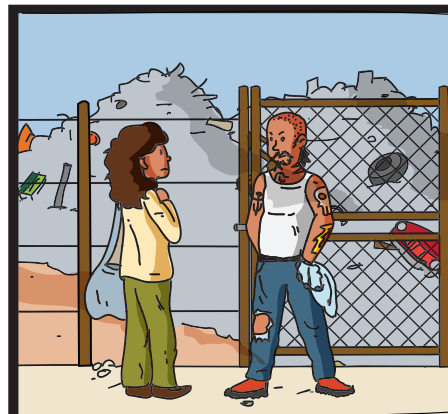




No tener un equipo de protección personal viola nuestro derecho a tener condiciones seguras de trabajo.



No tener servicio médico gratis y de calidad viola nuestro derecho humano a la salud.



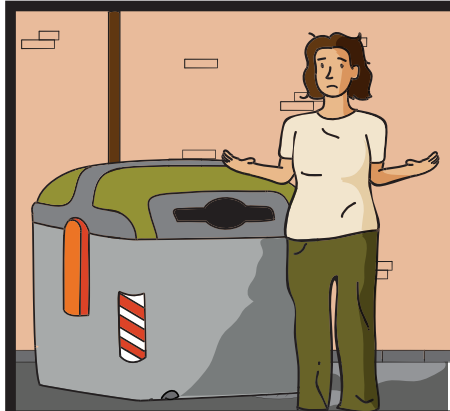
Limitar o restringir el acceso directo, así sea regulado, a los materiales reciclables en el vertedero, pone en riesgo nuestro sustento y nuestra vida.



Criminalizar el reciclaje vulnera nuestro derecho al trabajo y pone en riesgo nuestro sustento y a nuestra familia.



La precariedad de ingresos en nuestros trabajos y la falta de apoyo por parte del gobierno pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria.



Poner contenedores que no dejan obtener material reciclable es una violación a nuestro derecho al trabajo y a la vida.



Sin un gobierno que nos garantice nuestros derechos y la seguridad en nuestro trabajo, pandillas y otras organizaciones delictivas nos agreden y marginan.



Cuando nos expulsan de nuestra fuente de trabajo, quebrantan nuestro derecho al trabajo y a una vida digna.



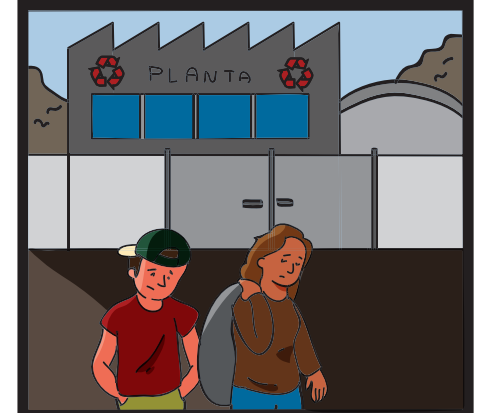
Si el gobierno incita a la violencia contra los recicladores, pone en riesgo nuestro derecho humano a la vida.



Cuando el gobierno no nos deja recorrer las calles para trabajar, viola nuestro derecho al trabajo.



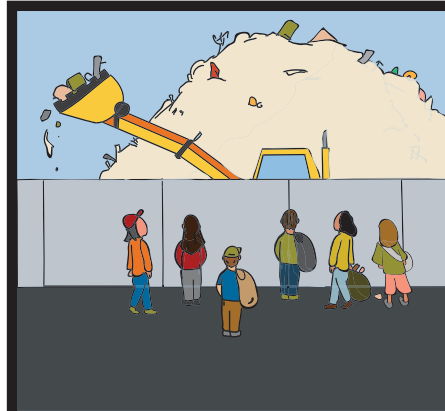
Forzarnos a encontrar otro trabajo es una violación de nuestro derecho a elegir en qué trabajar.



No generar alternativas laborales y no vincularnos a proyectos de tratamiento de residuos es discriminación.



Si el gobierno no nos informa ni nos toma en cuenta en decisiones relacionadas con nuestro trabajo, vulnera nuestro derecho al trabajo.



Que solo una empresa o unos cuantos tengan control de los residuos es discriminación y vulnera nuestro derecho al trabajo.



No dejar que nos organicemos con otros recicladores es una violación al derecho de asociarse.



La falta de acciones del gobierno para que los ciudadanos participen en la separación de residuos desde casa también viola nuestro derecho a un trabajo seguro.







